



¡Llegamos a Nariño!

La cebada que hace posible los brindis de miles de colombianos, ahora también se cultiva aquí.



Siembra Bavaria llega al departamento para impulsar el progreso del agro.

Para más información
Llama al 315 323 3122

Miguel Uribe Turbay

El rostro joven de la derecha tradicional, se convierte en llamado a la unidad nacional contra la violencia política.

El precandidato presidencial del Centro Democrático fue atacado a tiros por un menor de 15 años. Su pronóstico médico es reservado y la conmoción política crece dentro y fuera del país.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado este sábado 7 de junio en Bogotá, mientras participaba en una reunión política en el barrio Modelia.

El ataque estremece al país y reabre heridas del pasado, cuando la violencia política cobró la vida de varios candidatos presidenciales entre las décadas de 1980 y 1990.

El senador del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue herido de bala en la cabeza y una pierna por un adolescente de 15 años, quien fue capturado en el lugar del ataque. Uribe Turbay fue atendido inicialmente en una clínica del sur de la capital y luego trasladado a la Fundación Santa Fe para una intervención quirúrgica de emergencia. Según el parte médico, fue sometido a procedimientos “neuroquirúrgico y vascular periférico”, y su estado continúa siendo “de máxima gravedad”, con pronóstico reservado.

Un niño es quien dispara

La Fiscalía confirmó que el atacante portaba una pistola Glock 9 milímetros y que también resultó herido al intentar huir, siendo posteriormente atendido en la Clínica Colombia. Las autoridades han reforzado la seguridad en torno a figuras políticas y la investigación sigue en marcha para esclarecer si hubo instigadores detrás del hecho.

Dolor de patria

El atentado causó rechazo inmediato y generalizado en la clase política.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el ataque representa “un día de dolor de la nación” y exigió esclarecer no solo la autoría material, sino también a los posibles responsables intelectuales.

Desde todos los sectores, líderes políticos y sociales han expresado su condena al atentado, algunos recordando los crímenes de figuras como Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Álvaro Gómez Hurtado.

Colombia enfrenta hoy el desafío de evitar que esta tragedia sea el inicio de un nuevo ciclo de violencia electoral. Las próximas horas serán decisivas para el futuro de Uribe Turbay, y para la salud de la democracia en el país.

Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 tras un intento de rescate durante su secuestro por el cartel de Medellín, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay representa no solo una figura en ascenso dentro de la oposición colombiana, sino un símbolo de resiliencia frente a la violencia que ha marcado la historia del país.

Su vida, atravesada desde temprano por la violencia, ha influido en el tono firme y conservador que ha caracterizado su carrera política.

Formado como abogado en la Universidad de Los Andes, con una maestría en Administración Pública de la Universidad de



Miguel Uribe Turbay

Harvard, inició su carrera política como concejal de Bogotá a los 25 años por el Partido Liberal. Desde entonces, su oposición al entonces alcalde Gustavo Petro lo consolidó como una figura emergente de la derecha capitalina.

En 2016 fue nombrado secretario de Gobierno por el alcalde Enrique Peñalosa, desde donde logró articular importantes mayorías para sacar adelante proyectos como la financiación de la primera línea del metro de Bogotá.

En 2019 se lanzó como candidato a la Alcaldía de Bogotá, respaldado por una coalición que incluía a los partidos Liberal, Conservador y Centro

Democrático. Aunque no resultó electo, su visibilidad creció y fue acogido por el uribismo, que lo convirtió en cabeza de lista al Senado para las elecciones de 2022. Allí obtuvo la mayor votación de su bancada, fortaleciendo su perfil dentro de la oposición.

Desde el Congreso, Uribe Turbay se ha consolidado como opositor al gobierno de Gustavo Petro, en particular contra su política de “paz total” y sus reformas sociales.

En octubre de 2024 anunció oficialmente su precandidatura presidencial, destacando su defensa de la seguridad, el orden institucional y la economía de mercado.





MEMORIA



Cuando defender el territorio cuesta la vida

Un acto atroz, propio de una guerra sucia que no ha terminado nunca para quienes defienden la vida y el territorio en Colombia.

No bastan los Consejos de Seguridad, ni los comunicados de condena.

La impunidad sigue siendo la norma. El Estado, que debería proteger, sigue llegando tarde, o simplemente no llega. Las organizaciones indígenas han denunciado durante años la falta de

garantías, la militarización sin justicia, los acuerdos incumplidos. No hay paz posible mientras se sigan asesinando líderes. No hay Estado legítimo donde reina la impunidad. No hay justicia si callamos.

Denuncian presiones y posibles sabotajes desde el FOMAG Nariño



Docentes de Nariño impulsan veeduría a procesos de selección, contratación y ejecución de contratos en salud

Esta iniciativa representa un esfuerzo por proteger el nuevo modelo de salud frente a viejas prácticas de corrupción. Para los maestros, la vigilancia ciudadana no es solo una herramienta de control, sino una expresión activa del derecho a exigir que los recursos públicos sean administrados con ética, eficiencia y transparencia.

La veeduría, tramitará su reconocimiento formal ante la Personería y la Procuraduría.

INVERSIONES Y PLAN CORDILLERA PARA NARIÑO



Miguel Uribe Turbay

El atentado causó rechazo inmediato y generalizado en la clase política.



Unidad por el cambio, confrontación sin matarnos

Colombia se encuentra, una vez más, en una encrucijada histórica. En medio del ruido ensordecedor de la polarización, del desgaste institucional y de las tensiones acumuladas por décadas de exclusión, se reposiciona el asesinato como herramienta de profundizar o dirimir conflictos.

Antes que la muerte nos gane definitivamente la partida, se necesita capacidad para unir al progresismo como fuerza de la vida, por encima de todo sectarismo, y enfrentar con inteligencia social a los poderes del pasado, y derrotarlos definitivamente, empezando por superar la muerte como recurso de confrontación.

A la voz concertada de los expresidentes, unidos, hablando como si representaran la sensatez, la madurez, el patriotismo, como si se tratara de un gesto de grandeza o un acto desinteresado por el bien común, cuando lo que realmente los une es el temor a perder el control de un país cuya institucionalidad fue construida a su imagen y semejanza, diseñada para beneficiar a unos pocos y excluir sistemáticamente a las mayorías, debemos responder con la unidad popular, con la decisión hacer las cosas bien para ganarnos definitivamente el corazón de las grandes mayorías

Desde las alturas del poder, estos dirigentes del pasado se han convocado a unirse contra el progresismo, en una unidad entendida como el retorno al orden tradicional, el de las élites económicas, los clanes políticos, los bancos y los monopolios mediáticos. Una unidad que niega el dolor histórico de los pueblos originarios, de los campesinos, de los trabajadores precarizados, de los jóvenes sin futuro. En lugar de autocrítica, ofrecen continuidad. En lugar de transformación, ofrecen control.

Frente a esta unidad del privilegio, es necesario oponer la unidad de la esperanza. La unidad de los nadies, de los libres, de quienes creemos que el Estado no puede seguir funcionando como una maquinaria al servicio del capital, sino que debe convertirse en herramienta para garantizar derechos, cerrar brechas y construir una democracia sustantiva.

La unidad de quienes estamos convencidos de que el cambio no es una consigna, sino una necesidad impostergable. Solo con esa unidad popular y diversa será posible sostener el rumbo de las reformas y avanzar hacia un modelo de país basado en la justicia social.

Pero esta lucha por el cambio no puede extraviarse en la lógica de la violencia. El reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, joven líder de la derecha, no solo es un acto condenable desde cualquier perspectiva ética, sino que amenaza con socavar los frágiles pilares de la vida democrática. La historia de Colombia es demasiado sangrienta como para seguir pagando con vidas los costos de nuestras diferencias.

La confrontación política es necesaria, pero debe ser racional, civilizada, basada en ideas y no en balas. El atentado a Uribe Turbay es un campanazo brutal que nos obliga a todos los sectores —del gobierno, de la oposición, de la sociedad civil— a repactar las reglas mínimas de la convivencia democrática. La vida, incluso la del adversario, debe ser sagrada. No hay cambio posible si nos dejamos arrastrar por la lógica del enemigo interno y absoluto.

Hoy más que nunca, Colombia necesita una izquierda firme en sus convicciones, y madura en sus métodos. Necesita una oposición con ideas, no con odios. Necesita movimientos sociales movilizados, pero también organizados en torno a una visión de país. El cambio solo será viable si somos capaces de construirlo sin repetir las lógicas que nos han desangrado.

Frente a la unidad de los expresidentes, construyamos la unidad del pueblo. Frente a la violencia, construyamos el pacto ético de la confrontación política sin muerte. Ese es el verdadero desafío de hoy.



Corrupción, esa vieja costumbre que nos cuesta el futuro

Por María Fernanda Maya

Hablar de corrupción en Colombia no es una novedad. Es, lamentablemente, casi una parte del paisaje político, una mala costumbre enquistada en el ejercicio del poder público. El documento ¿Qué se entiende por corrupción? nos recuerda con crudeza que no se trata solo de un delito, sino de una práctica cultural tolerada, reproducida y, en muchos casos, normalizada. Un vicio que se infiltra en la cotidianidad del Estado y que erosiona no solo las finanzas públicas, sino la esperanza misma de una ciudadanía mejor.

La definición más sencilla y contundente es también la más lapidaria: la corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado. No necesita robarse un millón de pesos para ser corrupción; basta con desviar una decisión, manipular una licitación, ocultar una oportunidad, abusar de la influencia o traicionar el deber para obtener beneficios personales, políticos o de prestigio. El daño no es solo económico: es moral, institucional y social.

Lo más alarmante del texto es su advertencia sobre cómo la corrupción, más que un problema de algunos funcionarios, se convierte en una responsabilidad colectiva. No podemos seguir viéndola como una falla de “los políticos de siempre”, sino como un reflejo de una sociedad que, en muchos casos, prefiere callar, acomodarse o incluso participar, por acción u omisión, en estas redes de poder. Cuando los ciudadanos no denuncian, no vigilan, no exigen; cuando los votos se entregan a cambio de favores o los silencios se compran con contratos, la corrupción se institucionaliza.

El llamado a abrir buzones de denuncias, a ejercer control social, a volver a creer en la función pública, no puede quedarse en la retórica. Debe ser una acción política, pedagógica y ética permanente. El sur de Colombia, donde los recursos son más escasos y las necesidades más urgentes, no puede seguir pagando el precio de esa vieja costumbre llamada corrupción.

Si la corrupción es el obstáculo más devastador para el desarrollo, como afirma Peter Eigen, entonces combatirla no puede ser tarea secundaria. Nos estamos jugando la posibilidad de vivir con dignidad. En Nariño, como en toda Colombia, debemos pasar del hartazgo a la acción. No más indiferencia: denunciar, vigilar, exigir y, sobre todo, construir una cultura donde el bien público no se venda al mejor postor. Solo así dejaremos de acostumbrarnos a perder.

Importantes inversiones en vías de Nariño

Durante la reunión con líderes del gremio transportador, la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla, ratificó inversiones por más de 10 billones de pesos para las vías del sur del país. Se priorizarán proyectos de infraestructura estratégica y medidas para fortalecer la seguridad vial. El Gobierno confirmó que trabajará de forma articulada con las autoridades regionales y el Ministerio de Defensa.

En el encuentro sostenido con representantes de las agremiaciones de transportadores, la ministra de Transporte de Colombia anunció una serie de inversiones sin precedentes para la región. Entre los principales compromisos, destacó la adjudicación de la doble calzada Pasto–Estanquillo, con una inversión de 2.2 billones de pesos, y el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) Estanquillo–Popayán, que alcanzará los 7.6 billones. Ambas obras suman un total de 10 billones de pesos, cifra nunca antes destinada a las vías del suroccidente colombiano.

La ministra también anunció recursos adicionales para proyectos complementarios como Tumaco–Pedregal, la vía San Francisco–Mocoa, y la construcción de tres puentes, entre ellos el del Pinto. Se avanzará

en la resolución de trámites ambientales para otros proyectos como la vía Pasto–Ctambuco, y se priorizarán intervenciones en vías terciarias mediante el programa Caminos Comunitarios para la Paz, ejecutado por las propias comunidades.

En materia de seguridad, el Gobierno destinará inicialmente 51.000 millones de pesos a la adquisición de vehículos tácticos y sumará otros 20.000 millones para fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en las carreteras. Además, se planea incorporar drones y otros elementos tecnológicos del sector transporte para prevenir delitos.

La ministra enfatizó que las mesas de trabajo serán permanentes y se conformó un equipo conjunto entre gobierno nacional, autoridades locales, gremios de transportadores, sociedad civil y el ministerio de Defensa para garantizar la ejecución efectiva de los compromisos.

La ministra Rojas rechazó la convocatoria a un paro de transportadores, argumentando que este agravaría la situación económica de la región, y reiteró que los recursos anunciados ya están asegurados y en proceso de ejecución.

Finalmente, la funcionaria aseguró que estas



obras no solo mejorarán la movilidad, sino que transformarán estructuralmente la economía regional, impulsando productividad, conectividad y desarrollo social, con un enfoque de equidad y participación comunitaria.

“Entonces hemos ratificado el anuncio de que la obra pública Pasto–Estanquillo, que hoy ya tiene un proceso de adjudicación para los estudios y diseños, se entregará a final de este año. Se va a contratar el próximo año, queda adjudicada en este gobierno e iniciada en este gobierno, con una inversión de 2.2 billones de pesos.”

A eso se suma la APP Estanquillo–Popayán, por 7.6 billones de pesos.

Esa APP quedará este año adjudicada: ese es el compromiso. Estamos trabajando 24/7 con todos los equipos para que la adjudicación se pueda hacer este año.

Tercer compromiso: vamos a seguir destinando recursos para temas de seguridad, por los fondos, a través de los mismos peajes en las vías. En esta primera instancia hay 51.000 millones de pesos para vehículos tácticos que necesitan las fuerzas para poder operar. Más adelante tendremos 20.000 millones de pesos más para elementos similares. También estamos identificando otros elementos del sector transporte que se pondrán al servicio de la seguridad en las vías de Nariño, como, por ejemplo, drones militares que pueden proveer

información y ayudar a prevenir el delito.

Tenemos una adición al proyecto Tumaco–Pedregal, que cuenta hoy con recursos por 24.000 millones de pesos, y le vamos a inyectar más que esa inversión original: vamos a sumar 33.000 millones de pesos. Tenemos también un proyecto de tres puentes, entre ellos el puente del Pinto, en Tumaco.

Sobre el tema de Pasto–Catambuco, estamos resolviendo todos los temas de trámites ambientales para que esa obra sea viable. En cuanto a la vía San Francisco–Mocoa, que también es muy importante para la región, tendrá una inversión de 1.2 billones de pesos.



Del discurso a las bases: reto del gobierno Petro

Por Carlos Sánchez

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de “el cambio”, pero encontró un aparato estatal dominado por lógicas clientelistas, una élite política dispuesta a negociar prebendas y mantener privilegios, y un Congreso atravesado por intereses de enrequisimiento personal sin compromisos con el bien común.

En una apuesta inicial por formar una coalición amplia, el gobierno cometió su mayor error: confiar en los de siempre para hacer lo que nunca han querido, cambiar.

El resultado era predecible: las reformas se diluyeron, la narrativa de justicia social se volvió rehén de negociaciones oscuras, y el Ejecutivo se vio atrapado entre la aritmética parlamentaria y la traición permanente de los partidos tradicionales. No hubo correlación de fuerzas real; hubo una falsa gobernabilidad que solo profundizó la desafección ciudadana y desgastó el proyecto de transformación antes de consolidarse.

Pero la historia aún no está escrita en piedra. Frente al bloqueo institucional y la cooptación del Congreso, emerge una alternativa que no es nueva pero sí urgente: el poder desde abajo, a través de Juntas Populares de Gobierno. Esta propuesta representa una ruptura con la democracia representativa limitada, y una apuesta por una participación real, con poder de decisión sobre el destino local.

La experiencia demuestra que sin organización popular no hay reforma posible. Y que sin estructuras comunitarias autónomas, la política se reduce a espectáculo o imposición. Las Juntas Populares pueden convertirse en núcleos de soberanía territorial, en espacios donde se construya desde las prioridades reales: agua, salud, tierra, trabajo, educación, justicia ambiental, seguridad alimentaria.

No bastará con declararlas. Deben tener presupuesto, competencias, respaldo técnico, marco legal y, sobre todo, blindaje frente al clientelismo. Y deben estar sostenidas por un tejido social vivo, en formación y movilización.

Es aquí donde el enfoque cambia: no es el gobierno el que baja las soluciones, sino el pueblo quien defiende y logra sus prioridades.

Si el gobierno Petro quiere recuperar su proyecto histórico, debe entender que no puede seguir divagando entre las apasionadas y sinceras querencias del Presidente y la despreciable rapña de sus subalternos. Su fuerza está en los barrios, las veredas, los sindicatos, las comunidades indígenas y negras, las mujeres, los jóvenes. No hay otra forma de ganar un avance popular que no sea despertando la dignidad movilizadora, no con retórica institucional, sino con presencia real en el territorio.

El desafío no es técnico. Es político y ético. Se trata de construir una nueva forma de hacer poder: participativa, transparente, profundamente popular. Solo así el gobierno podrá honrar el mandato del pueblo que lo eligió y evitar que “el cambio” se quede como un eslogan más, que nos recordarán con burla los contrarios y con indignación los pueblos.

Comunicar con el pueblo

Por Johana Urbano

En un contexto de reformas ambiciosas, resistencias institucionales y disputas narrativas, la comunicación gubernamental se convierte en un factor estratégico para sostener la gobernabilidad y fortalecer la legitimidad popular. No basta con tener razón política: es imprescindible saber comunicarla. Y más aún, comunicar desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado propuestas que responden a demandas históricas de inclusión, justicia social y paz. Sin embargo, los desafíos no solo provienen de las élites tradicionales o de los poderes fácticos, sino también de una dificultad para conectar con amplios sectores de la ciudadanía. Parte de esta desconexión radica en una comunicación que, a veces, no logra ser clara, constante ni emocionalmente cercana.

El documento ¿Cómo evaluar cuándo un gobierno comunica bien? ofrece criterios útiles para repensar este desafío: un gobierno comunica bien cuando genera confianza, promueve el diálogo social, reconoce la diversidad de su audiencia y construye sentidos colectivos. Estos principios coinciden con la necesidad de fortalecer una cultura política democrática, en la que las decisiones no se impongan desde arriba, sino se construyan con base en la participación informada y crítica.

La comunicación no puede reducirse a alocuciones o trinos desde Palacio. Debe ser una pedagogía política cotidiana, descentralizada y sensible al lenguaje de los territorios. En esa línea, los Colectivos de Comunicación Ciudadana propuestos desde la Coropración Comunican no solo deberían impulsarse y consolidarse, sino convertirse en espacios permanentes de interlocución comunicativa con la base social.

Una gobernabilidad popular no se sostiene con tecnócratas ni con acuerdos cupulares. Requiere verdad, escucha activa, narrativas transformadoras y vocerías conectadas con el sentir ciudadano. En una época de saturación informativa y manipulación mediática, comunicar bien no es solo informar: es construir poder colectivo. Y en eso, el gobierno debe reenfocar su rumbo si quiere dejar huella.



Contra las comunidades

Matar es lo primero que se les ocurre Asesinatos en Ricaurte

La comunidad indígena exige justicia y medidas urgentes tras el brutal asesinato de uno de sus líderes. Con este crimen ya son 73 los asesinados en lo que va de 2025.

En un atroz episodio de violencia contra los pueblos indígenas en Colombia, **Luis Aurelio Araujo Hernández**, coordinador general del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), fue asesinado junto a sus escoltas **Jesús Alveiro Chaves Quejuan** y **Yackson Orlando Solarte Chunata** el pasado martes 3 de junio en zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño.

Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados, quienes les dispararon y luego incineraron el vehículo con los cuerpos en su interior.

El crimen ocurrió en la vereda Cuaiquer Viejo, dentro del resguardo indígena, alrededor de las 9:00 a. m. Las víctimas se movilizaban en una camioneta Toyota Prado de placas EQM 375 asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las imágenes en el lugar del asesinato dan cuenta de la sevicia con que fue ejecutado el ataque.

Luis Aurelio Araujo, asumió oficialmente la coordinación de Camawari mediante resolución del ministerio del Interior el 10 de marzo de 2025. Lideraba la organización conformada por diez resguardos awá en Ricaurte. Su nombramiento se dio en un contexto de tensiones políticas internas, amenazas persistentes y una creciente presencia de grupos armados ilegales que disputan el control del territorio.



El crimen ha sido calificado como una masacre por organizaciones como Indepaz, que advierten que con este hecho ya se contabilizan 28 masacres en Colombia en lo que va del año. La cifra de líderes sociales asesinados asciende a 73, en lo que diversas entidades señalan como un patrón de persecución sistemática. La reacción de las comunidades indígenas no se hizo esperar. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) exigió una investigación exhaustiva y medidas efectivas de

protección para los pueblos originarios. “Se deben garantizar medidas urgentes de protección para las familias de las víctimas y para las comunidades del pueblo awá”, expresó la organización en un comunicado. El presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros, condenó enérgicamente el crimen y lo atribuyó al ELN. “La muerte de los tres fue absolutamente bárbara y dantesca. ¡Malditos! Con la sangre indígena no se juega”, afirmó el mandatario, al tiempo que

ordenó un despliegue militar inmediato en la región y la aceleración de las investigaciones judiciales. Este triple homicidio no es un hecho aislado. El 1 de junio, William Arias, gobernador suplente del resguardo Quejuambi Feliciano, sobrevivió a un atentado armado en Barbacoas. Dos días antes, en el municipio de Linares, fueron asesinados Aquiles Vallejos López y Brayan Lora Rosero. En total, cinco personas han sido asesinadas en menos de una semana en el departamento de

Nariño, una región fuertemente golpeada por el conflicto armado. Camawari y otras organizaciones sociales insisten en que el estado debe garantizar condiciones reales de seguridad y presencia institucional efectiva en los territorios. Antonio Guanga, padre del líder asesinado, denunció que tras el crimen han aumentado las amenazas en contra de las comunidades awá. “Con la muerte de mi hijo, se ha generado el escenario propicio para que las intimidaciones a través de mensajes de

texto invadan Ricaurte y aumente la violencia contra las comunidades indígenas”, afirmó. El pueblo awá, en medio del dolor y la indignación, reafirma su lucha por la vida, el territorio y la autonomía. La memoria de Luis Aurelio Araujo no solo representa una pérdida irreparable, sino también un llamado urgente a proteger a quienes, desde los territorios más vulnerables, siguen defendiendo la dignidad, la paz y los derechos fundamentales de sus pueblos.



En la mañana del 3 de junio del 2025, en Ricaurte, Nariño, fueron asesinados a sangre fría el líder indígena Luis Aurelio Araujo Hernández y Jackson Solarte Chunatá y Jesús Alveiro Chávez sus dos escoltas. Fueron baleados, incinerados, borrados con fuego.





Consulta Popular y congresistas de bolsillo

Cuando el pueblo enfrenta al poder económico

Colombia se aproxima a una decisión política de importancia, la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro, que busca devolverle al pueblo la voz sobre reformas que afectan directamente su dignidad y su futuro. Esta propuesta no logró atravesar el filtro del Senado, un cuerpo legislativo cuyo mapa de intereses parece más cercano a los balances contables de los grandes conglomerados que a las aspiraciones populares.

Los datos no mienten. De los 105 senadores, buena parte ha recibido millonarios aportes de los llamados “cacaos” económicos: Ardila Lülle, Sarmiento Angulo y Santo Domingo, cuyos tentáculos se extienden por los partidos políticos. Estas donaciones, aunque legales, suponen un conflicto ético profundo: ¿puede

un legislador que debe su campaña a un grupo económico votar libremente por reformas que podrían afectar esos mismos intereses?

Cuando los sectores populares reclaman una reforma laboral que dignifique el trabajo, o una reforma a la salud que priorice al paciente sobre el negocio, los intereses de estas élites empresariales entran en juego. Ellos no solo financian campañas, controlan medios de comunicación, son proveedores del sistema de salud, accionistas de EPS, bancos, inmobiliarias y empresas de alimentos. No están interesados en una democracia participativa sino en una gobernabilidad dócil.

¿Quién representa, entonces, al pueblo? ¿Los que viven de su voto pero legislan para sus financiadores? La

consulta popular, en este contexto, se convierte más que en un mecanismo constitucional en un acto de resistencia democrática.

Es necesario alzar la voz. No se puede permitir que la voluntad de los pueblos sea filtrada por un Senado comprometido con quienes no sufren el desempleo, el hacinamiento en hospitales, ni la precariedad del campo. Lo que está en juego no es solo un mecanismo participativo, sino el derecho de una sociedad a reclamar sus derechos sin intermediarios con intereses cruzados.

La consulta popular no es solo un instrumento, es un grito de soberanía.

Trabajo por horas ¿Flexibilidad laboral o contrarreforma social?

El debate sobre la figura del trabajo por horas vuelve a ocupar el centro de la discusión pública en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro calificara esta modalidad como un “retroceso mayor que los contratos basura y la Ley 50, juntas”. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario rechazó categóricamente su inclusión en la reforma laboral, señalando que se trata de una propuesta heredada del expresidente Iván Duque que el Congreso anterior no quiso aprobar. “La reforma laboral se convierte con ese artículo en una verdadera contrarreforma”, advirtió.

La respuesta no se hizo esperar. El exsenador Antonio Sanguino, quien ha seguido de cerca el debate laboral en el Congreso, recordó que el trabajo por horas pone en

riesgo avances importantes como los recargos nocturnos, dominicales y festivos, los cuales fueron recuperados en las últimas discusiones legislativas. “El trabajo por horas destruye el relativo avance logrado en la Comisión IV del Senado”, señaló.

El modelo de contratación por horas ha sido defendido por algunos sectores económicos que lo presentan como una salida a la informalidad laboral. No obstante, para organizaciones sindicales, académicos críticos y buena parte del movimiento social, esta figura encarna la precarización del trabajo. En lugar de garantizar seguridad laboral y derechos, fragmenta las jornadas, debilita la estabilidad y reduce el ingreso efectivo de millones de trabajadores, especialmente en sectores como el comercio,

los servicios y el trabajo rural.

El fondo del debate no es solo técnico, sino político y ético: ¿debe una reforma laboral flexibilizar aún más el empleo o fortalecer el trabajo digno y estable como pilar de justicia social? En un país donde el 58 % de la población ocupada está en la informalidad, la respuesta no puede ser seguir debilitando los derechos conquistados.

La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral, prevista para las próximas semanas, pondrá a prueba la coherencia de un gobierno que se ha comprometido con el cambio estructural y la justicia social. Para muchos sectores sociales y sindicales, el trabajo por horas no cabe en esa agenda. La calle, como en otras ocasiones, será también escenario de esta disputa.

11 de junio

Movilización nacional por la Consulta Popular y las reformas sociales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó su Plan de Acción para la gran jornada de movilización del 11 de junio de 2025, en defensa de las reformas sociales, la democracia participativa y el derecho a la protesta.



La convocatoria, aprobada en su Comité Ejecutivo el pasado 3 de junio, se fundamenta en el rechazo a lo que consideran una “desfachatez del Congreso de la República” al bloquear las reformas laborales y sociales impulsadas desde el Gobierno Nacional.

El objetivo de esta movilización es claro, fortalecer la unidad del movimiento sindical y social, exigir el avance de las reformas del cambio y respaldar una Consulta Popular que devuelva la palabra al pueblo colombiano en temas fundamentales para el trabajo digno, la educación, la salud y la protección social.

El plan contempla acciones en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, como epicentros de movilización. También se realizarán caravanas desde los departamentos cercanos, marchas simbólicas con sombrillas decoradas, actividades culturales y artísticas, cadenas humanas y campañas

masivas de comunicación tanto digital como territorial.

Además de la movilización en sí, el plan incluye una ofensiva pedagógica y comunicacional para explicar de forma sencilla la relevancia de la Consulta Popular. Se usarán redes sociales, emisoras comunitarias, afiches, volantes y contenido en video para ampliar el alcance del mensaje. Frases como “¡Sin consulta popular no hay dignidad en el trabajo!” o “¡Si nos niegan el derecho a decidir, nos vamos a la calle!” guiarán la campaña.

La CUT también denuncia la no expedición de los decretos de aumento salarial pactados para los servidores públicos.

Esta movilización se perfila como una gran jornada en defensa de los derechos. Los trabajadores y diversos sectores sociales están listos para ocupar las calles y recordarle al país que la democracia también se ejerce movilizándose.



SI a la dignidad NO al despojo

El Congreso legisla contra el trabajo

En un país donde más del 50 % de los trabajadores vive en la informalidad y más del 60 % de los empleos no garantizan condiciones mínimas de dignidad, que el Senado colombiano apruebe en Comisión IV una contrarreforma laboral regresiva no es solo un error político, es una traición histórica a la clase trabajadora.

El pronunciamiento unitario de las centrales obreras (CUT, CGT, CPC, CDP y Fecode) desnuda con contundencia la naturaleza de esta propuesta, redactada a la medida del empresariado, diseñada para precarizar, debilitar y desproteger a quienes sostienen con su esfuerzo diario el funcionamiento de este país.

Legalizar el trabajo por horas —eliminar el salario mínimo mensual, desarticular las prestaciones sociales y promover la pobreza laboral—

no es modernización, es explotación maquillada.

Ampliar los períodos de prueba, dismantlar la estabilidad laboral reforzada para madres gestantes, personas con discapacidad o líderes sindicales, no es eficiencia, es desprotección institucionalizada.

Y reintroducir los pactos colectivos como herramienta antisindical es una afrenta directa al derecho de asociación y negociación colectiva.

Lo que se cocina en el Congreso no es una reforma, es una regresión de medio siglo en derechos laborales.

Es reinstaurar un modelo en que los trabajadores están solos frente al poder patronal, y donde el Estado abdica de su papel garante para transformarse en facilitador de la inequidad.

Frente a este atropello, las organizacio-

nes sindicales hacen lo correcto, convocar a la unidad y a la movilización, porque los derechos no se suplican, se conquistan y se defienden. En tiempos donde el capital financiero compra legisladores y medios, la calle vuelve a ser el lugar donde se decide el rumbo del país.

La contrarreforma es el síntoma. Pero el problema de fondo es un modelo político secuestrado por intereses privados que legisla contra el pueblo. Por eso, no basta con frenar esta ley, hay que construir una correlación de fuerzas nueva, donde el trabajo valga más que el dividendo, y la justicia social pese más que las utilidades.

Hoy más que nunca: no al trabajo por horas. No a la precarización. No a la servidumbre moderna disfrazada de flexibilidad.



Docentes de Nariño impulsan veeduría a procesos de selección, contratación y ejecución de contratos en salud

Maestros de varios municipios del departamento se organizan para supervisar el manejo de la salud del magisterio, exigiendo transparencia y previniendo irregularidades en la implementación del modelo nacional.

En respuesta al creciente malestar por la administración de los servicios de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en Nariño, grupos de docentes han iniciado la conformación de una veeduría ciudadana con el objetivo de fiscalizar la selección, contratación y ejecución de los recursos públicos asignados al sistema.

Los maestros expresan su respaldo al modelo de salud propuesto por el gobierno nacional, pero temen que su implementación esté siendo distorsionada por intereses políticos y personales en el departamento. “No podemos permitir que el manejo de la sa-

lud del magisterio se convierta en un botín de puestos y pesos”, advirtió uno de los voceros del colectivo en proceso de legalización.

Entre las principales preocupaciones destacan la posible asignación clientelista de contratos a clínicas, servicios de ambulancia y distribución de medicamentos, sin garantizar la idoneidad técnica de los prestadores.

Las denuncias no son aisladas, veedores y líderes sindicales han reportado remisiones obligadas a centros médicos específicos, pagos a operadores sin condiciones mínimas y la participación de funcionarios con vínculos previos con entidades contratadas.

Frente a este panorama, los docentes consideran urgente establecer vigilancia desde los territorios. La veeduría, tramitará su reconocimiento formal ante la Personería y la Procuraduría, tendrá como fun-

ciones el seguimiento técnico y financiero de los contratos del FOMAG, la recepción de denuncias de usuarios, la promoción de audiencias públicas y el fortalecimiento del diálogo entre el magisterio y el gobierno nacional.

Desde municipios como Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco y Consacá, los organizadores sostienen: “El FOMAG no puede estar al servicio de ningún partido, ningún operador privado ni ningún funcionario de turno. Es una conquista histórica del magisterio, y la vamos a defender”.

Esta iniciativa representa un esfuerzo por proteger el nuevo modelo de salud frente a viejas prácticas de corrupción. Para los maestros, la vigilancia ciudadana no es solo una herramienta de control, sino una expresión activa del derecho a exigir que los recursos públicos sean administrados con ética, eficiencia y transparencia.

Denuncian presiones y posibles sabotajes desde el FOMAG Nariño



Docentes alertan sobre incumplimientos en el pago de contratos y señalan maniobras que pondrían en riesgo la continuidad del servicio de medicamentos en el departamento.

Un grupo de docentes en Nariño ha levantado la voz para denunciar lo que consideran una serie de maniobras deliberadas por parte del FOMAG, destinadas a obstaculizar la operación de una empresa prestadora del servicio de medicamentos para el magisterio.

Según uno de los maestros entrevistados por este medio, los incumplimientos en los pagos contractuales por parte del fondo no serían simples retrasos administrativos, sino parte de

una estrategia. “Desde FOMAG se viene incumpliendo los acuerdos de pago hacia Proinsalud, principalmente al contrato de medicamentos, y eso lo veo con mucha suspicacia”, afirmó el docente.

Cuestionan a Hubert Agudelo, funcionario del FOMAG en la región. “Pareciera que desde FOMAG se pretende sabotear la continuidad en la entrega de medicamentos a los docentes y con esto sabotear la implementación del nuevo modelo de salud en Nariño, y eso nos preocupa mucho”, sostuvo el educador.

Una de las acciones que genera inquietud entre los usuarios es la intención de adecuar una oficina del

FOMAG dentro de la clínica Pabón, pese a que la mayoría de los docentes del departamento reciben atención a través de Proinsalud. “No veo otra explicación que no sea el intento de direccionar nuestra atención médica hacia determinados operadores”, dijo el docente.

Los docentes reclaman que no se utilice su bienestar como escenario de disputas entre operadores o funcionarios con posibles intereses.

La comunidad educativa pide a las autoridades investigar con rigor, garantizar la continuidad del suministro de medicamentos y proteger el acceso efectivo a la salud de miles de docentes en el departamento.

“
Maestros activos y jubilados se pronuncian

La salud es un derecho que está por encima de los negocios

“Hacemos un llamado al gobierno nacional y al FOMAG nacional, que en el menor tiempo posible llamen al orden al señor Hubert Agudelo, coordinador departamental, para que garanticen total imparcialidad y se frene el favorecimiento a determinadas entidades.”

“Esperemos que no haya intereses oscuros, con tantas cosas que se han visto, empezando con que se guardan los medicamentos y tantas cosas negativas en las EPS. Hago un llamado muy especial a mis compañeros jubilados para que nos pongamos las pilas y estemos en alerta.”

“Creemos que, si el Acuerdo 003 habla de libre elección, es el docente quien debe escoger dónde ir a recibir lo del segundo y tercer nivel, no que lo direccionen desde una entidad. Nos parece a nosotros que están dando informes sesgados, por parte de la coordinación del FOMAG.”

Conflicto de intereses en la coordinación del FOMAG en Nariño

Denuncia contra Hubert Agudelo Satizábal en manos de Procuraduría

Por posible conflicto de intereses al interior de la coordinación departamental de Nariño, bajo la dirección de Hubert Agudelo Satizábal. El documento denuncia que Agudelo, en su rol actual, toma decisiones directas sobre contratos que vinculan a Proinsalud, empresa en la que trabajó como subgerente de salud hasta agosto del año anterior.

Según la certificación adjunta a la queja, Agudelo laboró en Proinsalud desde el 29 de enero hasta el 16 de agosto de 2024. Apenas cinco meses después, fue designado como Coordinador Departamental del FOMAG en Nariño. Desde ese cargo, participa en la supervisión, evaluación, negociación y ejecución de al menos tres contratos vigentes entre el Fondo Nacional del Magisterio y la empresa en la que se desempeñó.

Estos contratos incluyen servicios de salud en modalidad ambulatoria y hospitalaria, así como la entrega de medicamentos para docentes y pensionados del sector educativo en Nariño.

Fundamento legal de la denuncia

La queja se apoya en los artículos 11 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) y 44 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que establecen con claridad que:

“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su socio o socios de hecho o de derecho”.

La ley también prevé la posibilidad de recusación cuando se haya tenido conocimiento directo del asunto en oportunidad anterior, o cuando se haya actuado como apoderado, dependiente o administrador de una de las partes interesadas.

¿Por qué es grave este caso?

Porque se trata de decisiones que afectan la salud de miles de maestros y pensionados.

Porque existe un riesgo real de que las decisiones se estén tomando con sesgos personales o empresariales, contrariando los principios de transparencia e imparcialidad que exige la función pública.

¿Qué piden?

Analizar con urgencia la situación de posible conflicto de intereses.

Tomar medidas que garanticen imparcialidad y objetividad en todas las decisiones contractuales que involucran a Proinsalud.

Asegurar que los procesos futuros de selección y supervisión se ajusten a los principios constitucionales de transparencia y equidad.

Si el FOMAG y el Gobierno Nacional desean garantizar que este modelo no repita los vicios, deben actuar con firmeza ante cualquier indicio de cooptación institucional o conflicto de intereses.

Permitir que decisiones vitales para la salud de los docentes se tomen bajo la sombra de intereses personales de los funcionarios públicos es no solo un error ético, sino una amenaza directa a la confianza pública en la reforma.



El modelo de salud del magisterio Falta de claridad territorial

La incertidumbre rondada al gremio docente en la implementación del nuevo modelo de salud. Persisten serias dudas sobre la forma en que se están comprometiendo los recursos, la equidad en la distribución territorial y el verdadero alcance de las medidas anunciadas.

Se están movilizando recursos en la reorganización de la red de prestadores, ampliando convenios y autorizando nuevas contrataciones. No obstante, no se especifican montos, ni se ofrece un desglose regional que permita hacer seguimiento riguroso al uso de esos recursos.

En medio del rediseño, la Fiduprevisora —administradora financiera del FOMAG— ha suscrito contratos con distintas IPS, garantizando la continuidad en algunas zonas y promoviendo nuevas alianzas en otras. Lo paradójico es que mientras se habla de “nuevas entidades” y “mayor cobertura”, no hay un informe que permita a los maestros conocer con certeza a qué prestadores pueden acudir por municipio, ni qué servicios están realmente habilitados.

Represamientos y urgencias

Otro de los puntos críticos tiene que ver con la atención de urgencias y represamientos de servicios. Todos los casos urgentes deben ser

atendidos sin trabas y las IPS deben hacerlo si el paciente se identifica como afiliado al magisterio. Sin embargo, la ausencia de una trazabilidad clara genera inseguridad y barreras de acceso.

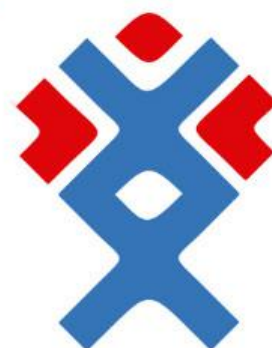
Las promesas de priorización para procedimientos repesados y atención especializada no vienen acompañadas de un cronograma ni de lineamientos para el seguimiento ciudadano.

El FOMAG debe servir para democratizar el acceso a la salud del magisterio, no para el favorecimiento a determinados contratistas. La democratización, la libre escogencia del prestador, solo será real si se garantiza transparencia total en la ejecución de recursos, control social sobre las IPS contratadas y atención diferencial.

Hasta hoy, lo que existe es anuncios, pero sin los informes, cifras y mapas que demuestren cómo se materializa la inversión prometida. En este contexto, el manejo administrativo se convierte en ruido político.

El magisterio colombiano tiene derecho a saber no solo que hay un nuevo modelo de salud, sino qué contiene, cuánto cuesta, quién lo presta y en qué condiciones se está ejecutando. La transparencia no puede ser un apéndice del modelo. Debe ser su columna vertebral.

COLECTIVO COMUNICACION CIUDADANA



C3



318 782 7354

**TRABAJA
CON
NOSOTROS
TUS:**

Contenidos

Redes

Medios

Libros

Revistas

Periódicos

